

La comunidad tumaqueña, azotada por todos los males del conflicto, ha vuelto a hacer un llamado de urgencia. El Gobierno debe someter a los violentos y ofrecer alternativas.

Una vez más, Tumaco vive «una de sus peores crisis». Las cifras reveladas ayer por este diario dan una idea de su caótica situación: una tasa de homicidios de 168 por cada 100.000 habitantes, cinco veces superior al promedio nacional; este año han tenido lugar en el puerto 193 asesinatos, 162 relacionados con el conflicto armado; su territorio alberga nada menos que el 10 por ciento del total de los cultivos ilícitos del país, una cifra a la que se le deben añadir las 60.000 personas que en los últimos quince años han tenido que salir de esta zona por amenazas de los grupos armados ilegales, sean guerrillas o bandas criminales.

Hay que incluir también el asedio que padece la comunidad awa, la parálisis del sector pesquero, un comercio azotado por la extorsión y un auge de la minería ilegal. Todos los males del nefasto catálogo del conflicto.

El más reciente capítulo fue protagonizado por las Farc, que dinamitaron seis torres de energía, acción que dejó en tinieblas al municipio durante 16 días, en los que se perdieron, según su alcalde, 7.500 millones de pesos.

Además, el grupo sembró minas antipersonales en la zona, que cobraron la vida de tres técnicos que trabajaban en su reparación y de dos indígenas awas.

Las autoridades aseguran que, con estas acciones, la guerrilla busca distraer al Ejército y a la Armada, que han logrado obstaculizar el tráfico de cocaína por rutas que, además, son objeto de una cruenta disputa con 'los Rastrojos'. Le atribuyen estas maniobras a una importante cantidad del alcaloide que permanece represada.

No hay duda de que el gran motor de esta lúgubre máquina de muerte es la droga. Su omnipresencia, bien sea en forma de cultivos, de cargamentos listos para ser embarcados o de fuente de dinero fácil que ciega a los jóvenes, no le permite a Tumaco salir de cuidados intensivos. Por eso, este municipio, con todo el derecho, hoy más que nunca pide ser prioridad del Gobierno.

Requiere tanto de una intervención inmediata que le devuelva al Estado el monopolio de la fuerza y garantice la tranquilidad de su gente, como de soluciones de largo plazo. Hay que escuchar a su obispo, monseñor Gustavo Girón, quien reclamó una urgente recomposición del tejido social.

Desde luego, el clamor de sus líderes, así como el de la población, no es nuevo.

Hace un año, desde estos renglones aplaudíamos la valerosa decisión de los tumaqueños de salir a las calles y, a una sola voz, decirles «no más» a los violentos. Se hizo énfasis, entonces, en la necesidad de cuidar la espontánea semilla de protesta ciudadana.

Pero la situación sigue crítica desde esa época. Poco ha cambiado el diagnóstico y, al contrario, tiende a empeorar. La buena noticia es que la semilla sigue intacta: lo confirma el hecho de que la semana pasada, por las vías del puerto, una marcha reclamó, de nuevo, el cese de la pesadilla.

De ahí la perentoria necesidad de atender tal voz y tender una mano a este azotado municipio. Le corresponde al Gobierno ofrecer, como ya se comenzó a hacer en la nueva estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos presentada en este municipio por el Ministro de Defensa y el Comandante de la Policía, alternativas productivas a los habitantes para tenerlos de su lado, y que solo los criminales sean objeto de la acción de la Fuerza Pública.

El potencial de la región es enorme. Tierras fértiles se suman a una ubicación privilegiada y a una población corajuda y con toda la disposición para liderar transformaciones. Tres factores que deben ser canalizados para generar un desarrollo que traiga bienestar, y dejar atrás esta triste época de tinieblas.

[http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-luz-para-tumaco-editorial-el-tiempo\\_12170249-4](http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-luz-para-tumaco-editorial-el-tiempo_12170249-4)